

Medellín, veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

Proceso	EJECUTIVO
Radicado	05001 31 03 005 2020 00270 01
Demandante	AXIA ENERGÍA S.A.
Demandada	PRODUCTOS FAMILIA S.A.
Juzgado origen	QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN

Decide la Sala la apelación interpuesta frente al auto del 1 de septiembre de 2021, mediante el cual se negó la nulidad presentada por el apoderado de la parte demandante.

1. ANTECEDENTES.

En audiencia del 1 de septiembre de 2021, el juzgado de origen celebró audiencia inicial dentro del asunto de la referencia, en este se decretaron las pruebas solicitadas por las partes, entre ellas, el dictamen pericial aportado por la parte demandada. El apoderado judicial de la parte demandante interpuso recurso de reposición contra dicha actuación, aduciendo que el mismo resuelve en gran medida puntos de derecho, los cuales están proscritos en los términos del artículo 226 del Código General del Proceso.

El *a quo* negó la reposición formulada y una vez notificada por estrados a las partes, el apoderado recurrente interpuso solicitud de nulidad en contra de la decisión proferida, considerando que en los términos del artículo 29 de la Constitución Política, que establece que la prueba obtenida con violación al debido proceso es nula de pleno de derecho, la prueba pericial incorporada en el proceso contraría lo dispuesto en los artículos 226 y 168 del Código General del Proceso.

El juzgado de origen negó la concesión de la nulidad interpuesta, por cuanto, en razón de la taxatividad de las nulidades procesales, dicha nulidad no se encuentra dispuesta en el artículo 133 ibídem ni en las demás normas procesales que determinan la existencia dicha institución procesal. Respecto de la nulidad de pleno derecho de que trata el artículo 14 del mencionado estatuto, indicó que hace referencia al defecto en la obtención de la prueba, evento que no se presenta en el presente asunto.

2. EL RECURSO.

La parte demandante se opuso a lo resuelto mediante recurso de apelación, argumentando que ha dicho la Corte Suprema de Justicia que cuando un medio probatorio desconoce derechos fundamentas

o normas legales básicas de los regímenes probatorios, se debe calificar la prueba como ilícita y con ello se debe sancionar con nulidad de pleno derecho, como en el presente asunto.

Mediante auto de la misma fecha, el juzgado concedió la alzada en el efecto devolutivo, ordenando la remisión del expediente digital a esta corporación para lo pertinente.

Posteriormente, añadió argumentos por escrito, indicando que la prueba es nula de pleno derecho por cuanto fue recaudada sin atender al debido proceso por inobservancia de las formas propias del juicio y que, el Código General del Proceso plantea la inadmisibilidad de las experticias que versen sobre puntos de derecho. A su consideración, el dictamen aportado se enfila a realizar un análisis técnico regulatorio del contrato celebrado entre las partes, situación que precisa corresponde al juez.

3. CONSIDERACIONES.

3.1 COMPETENCIA.

Por disposición del artículo 321 del C.G.P., el recurso de apelación contra autos procede solamente en contra de aquellos que la misma norma relaciona o que precisan disposiciones especiales, listado taxativo dentro del que se encuentra el proveído atacado en el numeral 6.

Para resolver, dispone el artículo 328 de la misma obra que, salvo decisiones que se deban adoptar de oficio, el superior debe limitar su análisis a las razones de inconformidad expuestas por el recurrente.

3.2 PROBLEMA JURÍDICO.

Le corresponde a la Sala determinar si la nulidad por ilicitud probatoria debió prosperar en los términos solicitados por el recurrente o si, tal como lo indica el despacho de primera instancia, la mencionada ilicitud es cuestión propia de la decisión que defina la litis y con ello habrá de confirmarse la providencia de primera instancia.

3.3 FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

Principio de especificidad o taxatividad de las nulidades procesales.

Las nulidades procesales se encuentran gobernadas por los principios generales *"de taxatividad, falta de convalidación e interés, puesto que solo lograrían socavar la determinación las inconsistencias determinadas e insuperables que por su trascendencia ameritan ser regularizadas, siempre y cuando las reporte el directo afectado"* (CSJ, AC 3531 del 14 de diciembre de 2020, Rad. n. ° 2015-00152-01). Lo anterior permite concluir que la nulidad procesal requiere que el vicio alegado esté previsto en la ley, que no haya sido saneado y que exista relación entre el vicio y el desmedro de derechos de quien lo alega. En nuestro estatuto procesal, dichos principios se vierten en el contenido de los artículos 133 a 136 del Código General del Proceso.

Respecto del primero de los principios mencionados, de taxatividad o especificidad ha dicho la Corte Suprema de Justicia que *«es indispensable 'un texto legal reconociendo la causal, al punto que el proceso sólo se considera nulo, total o parcialmente, por los motivos taxativamente consagrados como tales. Por esto, el artículo 143, inciso 4º del Código de Procedimiento Civil [actualmente el mismo inciso del artículo 135 del Código General del Proceso, aclara la Sala], establece que el juez 'rechazará de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en este Capítulo' (CSJ, SC del 1º de marzo de 2012, Rad. n.º 2004-00191-01)" (CSJ, SC 3943 del 19 de octubre de 2020, Rad. n.º 2006-00150-01)»* (entre comillas dentro del texto, CSJ, SC 3148 del 28 de julio de 2021, Rad. n.º 2014-00403-02).

Así las cosas, se tiene que, en atención al mencionado principio, la sanción a la actuación procesal debe, indefectiblemente, estar consagrada de forma clara y precisa en norma legal que la permita, estando proscrita la analogía por tratarse de una sanción.

Las nulidades dispuestas por el legislador en nuestro estatuto procesal, se encuentran contenidas principalmente el artículo 133 del Código General del Proceso, sin perjuicio de las demás determinadas a lo largo del código. Respecto del período probatorio, el legislador dispuso que solo acarrea la mencionada sanción procesal cuando *"se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria."*, a las voces del numeral 5 del artículo 133 ibídem.

En tratándose de las pruebas ilícitas obtenidas con violación al debido proceso, que devienen en nulidad de pleno derecho, tal como lo preceptúa el inciso final del artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 14 del Código General del Proceso, tiene dicho la Corte:

“[L]a sanción que en principio se deriva de la ‘nulidad’ de la prueba, no es otra que la de su ineficacia, asunto que, por regla general, no se expande al proceso el cual, en cuanto tal, no sufre mengua ni, por supuesto, da lugar a su renovación total o parcial, a menos obviamente que en casos excepcionales haya lugar a la repetición de la prueba.

Dicho esto, la diferencia entre la nulidad del proceso y la de la prueba, aflora diáfananamente, pues mientras la primera comporta un yerro de actividad del juez, la segunda puede despuntar en un error de juicio del fallador derivado de haberla estimado, no obstante su irregularidad (SC, 13 dic. 2002, exp. n.º 6426¹)” (CSJ, SC 4257 del 9 de noviembre de 2020, Rad. n.º 2010-00514-01).

Dicho en otras palabras, atendiendo a la especificidad como principio regulador de las nulidades procesales en consonancia con la sanción predicada de las pruebas ilícitas, cuando se obtiene una prueba con violación al debido proceso que deviene la nulidad de pleno derecho, esta nulidad compete exclusivamente a la prueba y es objeto de valoración del juez al momento de decidir el litigio o incorporar la prueba al mismo, no obstante, de ninguna manera podría considerarse que la nulidad de una prueba comporta la nulidad del proceso.

Lo anterior, puesto que la nulidad de la prueba comporta “una regla de exclusión probatoria, «vale decir, [impone] la separación de ese material suasorio del elenco probatorio. Así las cosas, es infortunado y estéril el esfuerzo del recurrente enderezado a enmarcar en el contexto... [de] la nulidad del proceso» (SC, 28 ab. 2008, rad. n.º 2003-00097-01).” (CSJ, SC 4257 del 9 de noviembre de 2020, Rad. n.º 2010-00514-01).

3.4 CASO EN CONCRETO.

Conforme a lo dispuesto en nuestro ordenamiento procesal y la doctrina relacionada supra, analizado el argumento sustento de la nulidad formulada por el accionante de la que aquí se decide su alzada, encuentra la Sala que este consideró que la prueba, consistente en el dictamen pericial aportado por la parte demandada, era una prueba ilícita por ser violatoria del debido proceso, censura

¹ Posición reiterada en los pronunciamientos SC, 16 may. 2008, rad. n.º 2003-00723-01 y SC, 1 jun. 2010, rad. n.º 2005-00611-01, por lo que constituye doctrina probable.

que no comporta una nulidad procesal tal como se consideró en precedencia. Puesto que, la ineficacia como sanción de la prueba ilícita compone una carga de valoración judicial por parte del despacho de primera instancia y en ninguna forma de invalidación del proceso como lo pretende el recurrente, por cuanto la exclusión probatoria atañe únicamente al medio probatorio sin que permee o se expanda al proceso mismo.

En consecuencia, como quiera que la nulidad deprecada por el recurrente no se encuentra taxativamente dispuesta por el legislador, la Sala comparte la conclusión a la que arribó el *a quo*, por lo que se confirmará la decisión, sin condena en costas por no haberse causado.

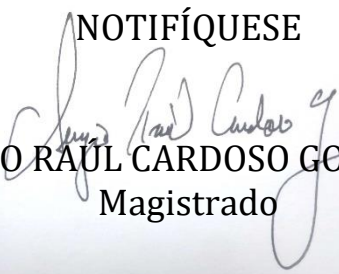
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Unitaria de Decisión Civil,

1. RESUELVE.

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión impugnada, sin condena en costas.

SEGUNDO: REMITIR el expediente al juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE



SERGIO RAÚL CARDOSO GONZÁLEZ
Magistrado